

co que han llegado últimamente a Inglaterra. Los negocios comerciales habían vuelto a tomar impulso, y la plaza presentaba el aspecto más lisonjero.

El nuncio de Su Santidad en España, monseñor Brilli salió ayer de Roma en dirección a esta corte, según ha anunciado el telégrafo.

De acuerdo nuestro apreciable colega La Crónica con el espíritu de nuestro artículo del miércoles, le trasladamos a sus columnas haciéndolo proceder de estas oportunas consideraciones:

El siguiente artículo de nuestro apreciable colega EL OCCIDENTE, que es harto severo en el fondo, por mas que sus formas tengan cierto sabor festivo, es la demostración del extremo a que llega en algunos de nuestros hombres públicos, el deseo de figurar en los altos puestos del Estado, contra cuyas imprudentes e ilógicas y antipolíticas aspiraciones no bastan ni el consejo imparcial y sensato, ni las reflexiones prudentes y persuasivas, de los que con menos años sí, pero con mas fe en el dogma constitucional y con mejor conciencia acerca de la prosperidad de nuestra patria, han creído, con nosotros, deber alzar la voz, para oponerse a que vuelva a suceder en España en punto a la provisión de los cargos públicos, lo que hasta hoy ha sucedido, en desdoro de los mismos hombres que los han ocupado, y en mengua del sistema constitucional.

Si no bastan la prudencia y la templanza, para apartar a los hombres aspirantes de la funesta ambición de mando, de la pasión ciega que los devora, es preciso apelar a las armas de la sátira y del ridículo, esto es, a la crítica. Si se por fuera suficiente tendríamos una razón mas para sostener, con pertinencia, al partido conservador la influencia de ciertos hombres.

He aquí ahora las palabras que nuestro colega dedica al marqués de Pidal, que es ciertamente la más alta personificación de los hombres a que acabamos de aludir.

Ya hemos dicho que aun no ha llegado a nuestro poder el *memorandum* acerca de la cuestión pendiente entre Méjico y España, presentada al ministro de Estado de aquella república por el señor don José María Lafragua, enviado extraordinario de aquella república cerca de nuestra corte.

He aquí, no obstante, algunas noticias relativas a su contenido, que hallamos en un periódico de Madrid:

Este documento, corregido y templado en sus formas, circunstancias singulares y estilísticas en un escritor mejicano, que no carece de sofisticada habilidad en la exposición de los argumentos, está dividido en tres partes:

La primera es una relación de los sucesos que provocaron el rompimiento entre España y Méjico, hecha con bastante exactitud, pero en la cual, sin embargo, se advierte la ausencia de porfimerías, de acedentes, hasta de hechos esenciales que determinan el carácter del suceso, y son necesarios para apreciar la toda su extensión: de suerte que la narración es exacta, pero no es imparcial, porque no es completa.

La segunda parte se titula observaciones, y en ella el señor Lafragua explica largamente el origen de la cuestión, intenta justificar la conducta del gobierno de Comodoro, censura la de nuestro representante el señor Sagasta y la de nuestro ministro de Estado el señor Pidal; discute los fundamentos en que se apoyan las reclamaciones de España, establece la especie de responsabilidad que puede corresponderle a Méjico, insiste en que la república ha estado y está dispuesta a satisfacer hasta donde su decoro y su conciencia le exija, invoca testos de autores acreditados, es, en fin, la parte de verdadero alegato; donde después de fijados los hechos, se quiere hacer la aplicación de derecho.

La tercera parte está consagrada al examen de las convenciones de la deuda española en esta última relación, y no resultado de un plan político contra los españoles, para deducir de ahí que no constituyen una ofensa de nación a nación, según el derecho de gentes, y que son injustas, por tanto, las reclamaciones de España, que solo tiene derecho a pedir que siga su curso la justicia ordinaria, y no que castigue a los que la opinión pública designe como culpables, y menos que se indemnice a los perjudicados por los crímenes de San Vicente y por otros atentados anteriores.

El representante de la república resume su opinión en los siguientes puntos, que se lisonja de haber demostrado:

Que el gobierno de Méjico no ha tenido parte alguna en los crímenes cometidos. Que no pudo impedirlos. Que no los ha tolerado. Que está resuelto a castigarlos con todo el rigor de las leyes. Que la dilación de los procesos depende, ya de circunstancias particulares de cada uno de ellos, ya de la agitación en que se encuentra el país, ya de las peculiares condiciones de los Pueblos en que aquellos se instruyen. Que no hay plan alguno contra los españoles; y que si algunos de estos han sido ofendidos por algunos mejicanos, el gobierno de Méjico ha ofendido al de España, ni la nación mejicana tiene odio a los españoles. Que los disgustos provienen en mucha parte de la conducta imprudente de algunos españoles, sin que de esto se haga cargo al gobierno ni al pueblo español. Que el gobierno de Méjico está pronto a indemnizar perjuicios, así, causados por hechos, se prueba conforme a las leyes que se halla en alguno de los casos en que, según el derecho de gentes, los superiores son responsables de la conducta de sus súbditos, y que si ha faltado, ni quiere faltar a la fe de los tratados. Que está dispuesto a cumplir el de 1853, reclamando, si, de la justicia de S. M. la Reina de España, la revisión de los créditos indebidamente introducidos en el fondo de la convención.

En El Clamor de ayer hallamos las siguientes noticias:

«Parece que está ya acordado el arreglo del ministerio de Hacienda, y entendidos los decretos para po-

nerlos a la firma de S. M. Serán separados don Juan Bautista Trupita, director de contribuciones, y don José García Barzanallana, director de aduanas y aranceles.

Se establecen dos direcciones de contribuciones, una de directas y otra de indirectas. Para la primera será nombrado don Diego Lopez Ballesteros, y para la segunda don Luis Alvarez, director de contabilidad, que será reemplazado por el señor Quintana, director de estancadas, pasando a este destino el señor Lazoit, subsecretario, y a la subsecretaría el señor Sierra y Moya.

En la dirección de aduanas entrará el primer vocal ponente de la Junta don Romualdo Lopez Ballesteros.

He aquí cómo rectifica la *Correspondencia* autógrafo las contradictorias noticias sobre la separación del general Riquelme de la dirección general de infantería:

«En tanto que El Clamor indica que se habla de la dimisión del general Riquelme del cargo de director general de infantería, *Las Novidades* dice que se sostiene con bastante fundamento la noticia de que, ni el general Riquelme será separado de la dirección de infantería, ni el general Sanz del cargo de primer ayudante del Rey. Creemos que nada hay por el momento que autorice la noticia de semejantes separaciones.»

A la interpección de El Clamor que conocen nuestros lectores, contesta la Hoja en los siguientes términos:

«Hoy El Clamor Público dirige varias preguntas a las Hojas sobre una cuestión relativa a varios abusos que dice cometidos con dos presos hace algunos meses. Sentimos en el alma de ver que en las espaldas del periódico progresista, puta las Hojas, que según dice El Clamor todo lo averiguan, no han averiguado lo bastante para satisfacer tantas preguntas. Pero desde luego creemos poder asegurar a El Clamor que en la secretaría de la Gobernación no se ha detenido infirme alguno del género denunciado por El Clamor; que el ministerio actual, desde su instalación en el poder, ha tenido que ocuparse de graves y urgentes asuntos, y que no es extraño que aun no haya podido fijar su atención en algunos cuya importancia, aunque grande en absoluto, no puede ponerse en parangón con las vitales cuestiones, tanto políticas como económicas, que está llamado a resolver; y sin embargo, tenemos entendido que el gobierno, en medio de estas graves cuidados, ha fijado ya su atención en el expediente a que hace alusión El Clamor, encargando su pronto despacho. Espere, pues, un poco el periódico progresista, que si los abusos se han cometido, serán castigados, y los hechos se esclarecerán, tanto como pueda apurarse.»

Ayer a la una de la tarde se celebró en la administración de la *Revista Peninsular Ultramarina* una reunión de ingenieros inspectores e industriales que se proponían discutir sobre las causas que en España se oponen o retardan los progresos de la industria minera, y convenir en un plan o conjunto de los buenos principios adecuados, para formular el cuerpo de doctrina científica, económica y administrativa que debe respaldar en una buena ley de minería, atendidas las circunstancias del país, tanto con el fin de inculcarlos en la opinión pública por medio de la prensa, como para regar al gobierno y a las Cortes que se sirven tomados en consideración para introducir salubres reformas en la nueva ley del ramo que actualmente se confecciona en las regiones oficiales. Sobre el punto en cuestión hablaban algunas personas y aun se trató de nombrar una comisión que formara las bases del citado plan; pero considerando que el número de individuos presente era corto para tan importante nombramiento, se acordó aplazarlo hasta el domingo próximo, en cuyo día se verificará una reunión mas numerosa.

Despacho telegráfico particular de la *Gaceta de Madrid*.—Paris 25 de noviembre de 1857.—El diván de la Valaquia ha decidido declararse incompetente para resolver las cuestiones relativas a la organización interior del Principado.

Por toda la sección de sueltos: Job yeh

F. M. Redondo.

ESPIRITU DE LA PRENSA.

La España pone término a su polémica con El Clamor sobre la conducta observada por este con el ministerio, cuyos actos ha defendido como si se tratara de hacer prevalecer en el gobierno las doctrinas que sustenta El Clamor Público.

La *Crónica*, discutiendo con la *Regeneración* dice entre otras cosas:

«Dice nuestro colega que el argumento espuerto por nosotros de que la misma bandera que ha enarbollado es la que tremoló en el campamento de D. Carlos, a pesar de ser un argumento hábil, es de aquellos que por probar mucho no prueban nada. Esto, a la verdad, es una cosa que nunca hemos podido comprender, quizás por nuestra habitual torpeza; siempre hemos creído que lo poco se acerca a la nada, a medida que se aleja de ella. Necesitábamos, pues, que se nos hubiese explicado esa especie de alfilerismo, y nuestro colega se reduce a decir que con un argumento de igual índole podría demostrarnos que entre nuestras aspiraciones y las de la *Libertad* no había diferencia ninguna; pero como solo dice que esto podría hacerlo, y no lo hace, nuestra dificultad es la misma para comprender de qué modo un argumento, por probar mucho, no prueba nada; y de paso preguntaremos a nuestro colega: ¿si podía hacer esto, por qué no lo ha hecho?»

Pero el párrafo ciertamente mas importante del artículo de la *Regeneración* es el siguiente:

«De manera, dice, que si por efecto de esas instituciones (las constitucionales) manana se reuniese un Congreso que haciendo lo que hicieron las Cortes de 1836, las de 44 y las de 54, diesen al país una Constitución tal como nosotros la deseamos, desembranzando al trono de toda trama revolucionaria, y determinando que las leyes se confeccionasen sin ruido y con el consejo de los *hombres sabidores*; si esto sucediese, tendríamos que, según la declaración de la *Crónica*, Isabel II habría dejado de ser soberana, porque le faltaba la condición en virtud de la cual vive sentada bajo el solio de sus mayores.»

Nuestro colega confunde hábilmente la posibilidad de los hechos, con el valor que pudieran tener; nos-

otros hemos negado únicamente lo primero, y el periódico monárquico supone lo segundo. No hemos dicho, ni pensamos para qué decirlo, que si una Cortes declarase soberana absoluta a doña Isabel II, dejaría de serlo; mucho menos podríamos asegurar tal cosa, cuando se dice por base de su gobierno una Constitución, palabra que en el artículo anterior de nuestro colega no aparece en su bandera, pero que hoy está escrita en su credo; hemos dicho, sí, que era imposible que tal cosa sucediese, y si para ello necesitásemos repetir lo que entonces escribíamos, he aquí nuestras palabras:

«La *Regeneración*, pues, podrá no tener la intención de defender a D. Carlos, ni a su partido; pero como espera, entonces, el triunfo de sus principios? ¿Por qué razón si por tales medios se consiguesen? Pues larga entendido, que no es posible alcanzarlos por otros, porque el trono de doña Isabel II está basado sobre las instituciones constitucionales, a nombre de las cuales venció en los campos de batalla, y la razón rechaza, y la historia nos demuestra, que no es posible prescindir de tales antecedentes.»

Y es imposible, si, porque en donde buscaria entonces su apoyo el trono de doña Isabel II? En el partido absolutista; y ¿no sería muy irrisoria esta política? Nosotros queremos suponer que se olvidarán resentimientos creados por una larga y sangrienta guerra; suponemos mas, porque llamamos mucho en la nobleza y generosidad del carácter castellano; suponemos que están ya olvidados; pero creemos que para realizar esa amalgama seria necesario además que por una y por otra parte se prescindiera de compromisos muy sagrados, y esta suposición no la haremos contra ninguno de ambos elementos.»

El *Diario Español* inserta un artículo remitido sobre la crisis monetaria que se experimenta en muchas naciones de Europa.

El *Clamor Público* desconfía de la nivelación del déficit para el año próximo. Los medios que se ofrecen para producir mayores rendimientos al Erario, como son la desamortización, la reforma de aduanas, y la sustitución de la cuota alzada por el tipo individual y fijo en la contribución directa, no ofrecen, en concepto de nuestro colega, sino resultados lejanos, y dejan en pie las necesidades apremiantes del momento.

La *Libertad* examina la cuestión de si deben existir a un mismo tiempo, en un mismo país, dos monedas legales, o una sola.

Para nosotros, dice, es incontestable que no deben existir dos monedas legales; esto es, que el gobierno no debe marcar la relación de los metales amonetados; pero esto equivale a decir que no debe haber moneda legal alguna, porque dada una sola, el gobierno habrá de limitarse a decir qué cantidad lleva del metal fijo, y qué cantidad de liga, añadiendo el valor de la acoñación, en cuyo caso la arrojará a la plaza como una mercancía mas, dejando a las variaciones de la oferta y la demanda que la señalen su precio. Para señalar un precio arbitrario, necesita tener otra mercancía por escalería, con la cual comparezca.

Las *Nuevas* no espera nada del actual ministerio, a quien trata en los términos de que puede formarse idea por el siguiente párrafo:

«El señor es Mon y Bermudez de Castro han venido a liberalizar el partido moderado, para después liberalizar el país; a ser otra vez la expresión de los tiempos modernos, rechazada momentáneamente por razones que todos sabemos. Y como la iniciativa nombra diez y nueve gobernadores, y todo su liberalismo se reduce a respetar, al menos con promesas, las Cortes de la ley de imprenta; y su única novedad consiste en una política de balanceo; en caminar con tardas oscilaciones, hoy que los pueblos caminan al impulso del vapor; en despreciar los análogos elementos de su vacilante política, y seguir satisfechos y tenaces, como si su conciencia ministerial fuera una garantía contra las inevitables consecuencias de esa política que no puede llamarse tal.»

La *Discusión* publica su XII artículo sobre las clases jornaleras.

La *Esperanza* no está conforme con la supresión de la cámara del real patronato.

El *Centro* sigue tratando el asunto de la supresión de festividades religiosas.

El *Leon Español* alaba la parsimonia con que se conduce el gabinete Armero, lo cual, en su concepto, debe ganarse muchos amigos.

El *Estado* comenta la siguiente definición de la union liberal, dada por La Epoca:

«La union liberal es una idea y un conjunto de doctrinas, y además un partido político que está hoy naciendo; pero al cual se abre un porvenir mas ilustre que lo que algunos sospechan.»

La *Epoca* continúa defendiendo a la *Libertad* liberal, haciéndose cargo de algunas ideas vertidas por el señor Borrego, a propósito de aquella teoría.

Por extraño, la *Regeneración* dice:

F. M. Redondo.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. la Reina nuestra señora (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO

Tomando en consideracion las razones que me ha espuesto D. Manuel Bermudez de Castro, vengo en relevarle del cargo de mi enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de S. M. el emperador de Austria; quedando muy satisfecha del celo, lealtad e inteligencia con que le he desempeñado.

Dado en Palacio a once de setiembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Estado, Pedro José Pidal.

En atención a los servicios y particulares circunstancias del ministro plenipotenciario D. Leopoldo Augusto de Cueto, subsecretario en comisión de mi secretaría de Estado, y diputado a Cortes, vengo en nombrarle mi enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de S. M. el emperador de Austria.

Dado en Palacio a seis de octubre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Estado, Pedro José Pidal.

Vengo en disponer que D. Leopoldo Augusto de Cueto, nombrado mi enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la corte de Austria, desempeñe igualmente este cargo cerca de S. M. el rey de Baviera. Dado en Palacio a seis de octubre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Estado, Pedro José Pidal.

En atención a las particulares circunstancias que concurren en D. Juan Tomás Comyn, que fue nombrado ministro residente en Costa Rica y Nicaragua, y desempeña actualmente en comisión el cargo de primer secretario de mi legación en Londres, vengo en nombrarle subsecretario del ministerio de Estado.

Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Estado, Francisco Martínez de la Rosa.

MINISTERIO DE MARINA.

Exposición a S. M.

Señora: El incremento que de algunos años acá viene recibiendo el material de la marina militar, merced a la ilustrada protección que V. M. se digna dispensar a tan importante ramo del Estado, ha hecho ya insuficiente el personal de que constan varias clases de la escala activa del cuerpo general de la armada para cubrir los mandos y destinos que les están afectos.

Si el servicio público no se ha resentido hasta ahora de dicha circunstancia, ha sido a costa de proveer aquellos cargos en oficinas de inferior graduación a la que corresponde por ordenanza y reglamentos, práctica que envuelve entre otros inconvenientes el de someter a los elegidos a mayor responsabilidad, sin otorgarles los ascensos y ventajas inherentes a la posición en que se les coloca.

Penetrado el ministro que suscribe de la conveniencia de poner término a tan irregular sistema y de proporcionar a los oficiales de la armada los adelantos en la carrera que reclaman las exigencias del servicio, tiene la honra de someter a la real aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto en que se fija el personal de que por ahora deberá constar la escala activa con presencia de los destinos que a cada clase están señalados.

Madrid 24 de noviembre de 1857.—Señora.—A los R. P. de V. M.—El ministro de Marina, José María de Bustillo.

REAL DECRETO.

Tomando en consideracion las razones que me ha espuesto el ministro de Marina, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El personal de la escala activa del cuerpo general de la armada constará por ahora de un capitán general, cinco tenientes generales, 12 jefes de escuadra, 16 brigadieres, 30 capitanes de navío, 60 capitanes de fragata, 180 tenientes de navío y el número indeterminado de alféreces de navío que produzca el ascenso de los guardias-marina que cumplan el tiempo de servicio señalado en el reglamento de esa clase.

Art. 2.º Desde 1.º de enero de 1858 se aumentará hasta 130 plazas la dotación de aspirantes del colegio naval militar.

Dado en Palacio a veinticuatro de noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Marina, José María de Bustillo.

Dirección de armamentos.

A consecuencia de un reconocimiento que practico en tierra la tripulación de la escuadrilla *Libertad* el 12 del actual, fueron apresadas en las inmediaciones de Casa García, costa E. de la isla de Mallorca, 36 bultos de tabaco de paja, habiendo capturado igualmente un carro con dos mulas y dos hombres que se hallaron en la paja en donde existía el citado contrabando.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

No habiendo tenido efecto por falta de licitadores las subastas celebradas para contratar la conducción diaria de la correspondencia pública de Sevilla a Huelva y vice-versa en virtud de reales órdenes de 10 de agosto y 2 de octubre últimos, y estando comprendido este caso en la excepción 8.ª del artículo 6.º del real decreto de 27 de febrero de 1852, de conformidad con el parecer de mi Consejo de ministros, vengo en autorizar al de la Gobernación para que contrae el servicio sin las solemnidades de subasta pública.

Dado en Palacio a veinticuatro de noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernación, Manuel Bermudez de Castro.

Subsecretaría.—Sección de gobierno.

Negociado 4.º

La Reina (Q. D. G.) ha leído a bien declarar, por acuerdo de este día, que los resguardos correspondientes a las cantidades que se consignen en la caja general de depósitos de esta corte para tomar parte en las subastas de los *Boletines oficiales*, deben admitirse en los referidos actos de la misma manera que los expedidos por las sucursales de dicha dependencia principal en las provincias respectivas.

De real orden lo digo a V. M. para su inteligencia, y efectos correspondientes. Dios guarde a V. M. muchos años. Madrid 24 de noviembre de 1857.—Bermudez de Castro.—Señor gobernador de la provincia de...

MINISTERIO DE ESTADO

Convenio entre S. M. la Reina de España y S. M. el Rey de Cerdeña para asegurar la recíproca extradición de malhechores.

S. M. la Reina de España y S. M. el Rey de Cerdeña, habiendo resuelto de común acuerdo ajustar un convenio para la recíproca extradición de malhechores, que asegure la represión de sus crímenes y delitos ordinarios cometidos en sus respectivos territorios, y cuyos autores o cómplices quieran sustraerse a la vindicta pública y a la acción de las leyes refugiándose de uno a otro país, han nombrado con este objeto, por sus plenipotenciarios, a saber:

S. M. la Reina de España al Excmo. señor don Alejandro de Castro, caballero gran cruz de la real orden de Isabel la Católica, comendador de número de la real y distinguida orden de Carlos III, diputado a Cortes en varias legislaturas, y su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de S. M. el Rey de Cerdeña.

S. M. el Rey de Cerdeña al Excmo. señor don Camilo Benso de Cavour, diputado en el Parlamento,

presidente del Consejo de ministros y ministro de negocios, extranjeros, caballero de la orden suprema de la Santísima Anunciata, caballero gran cruz de la real y distinguida orden de Carlos III de España etc. etc.

Los cuales, después de haber cangeado sus plenos poderes y hallándose en buena y debida forma; han convenido lo siguiente:

Artículo 1.º El gobierno español y el gobierno sardo se obligan recíprocamente a entregarse, con la única excepción de sus respectivos súbditos, todos los individuos que de España y sus posesiones se refugien en los estados sardos o en sus posesiones, y los de los estados sardos que se refugien en España y en las suyas, acusados o condenados por cualquiera de los crímenes previstos en el art. 3.º por los tribunales de aquel de los dos países en que el crimen haya sido cometido.

La extradición tendrá lugar en virtud de reclamación del uno al otro gobierno por la vía diplomática.

Art. 2.º Los crímenes y delitos políticos quedan excluidos de la presente convención.

Se estipula expresamente que el individuo cuya extradición sea acordada no podrá ser en ningún caso procesado ni castigado por crímenes o delitos políticos anteriores a la extradición, ni por algún hecho que tenga conexión con aquellos delitos no previstos en la presente convención.

Art. 3.º Los crímenes y delitos por los cuales la extradición será recíprocamente acordada, son:

1.º Parricidio, asesinato, envenenamiento, homicidio, infanticidio, aborto, estupro violento, atentado contra el poder cometido con violencia o en un paradero menor de 11 años, lesión corporal o herida grave que ocasiona la muerte, abandono de recién nacidos si se verificó con intención de causarles la muerte y esta fuese la consecuencia del abandono.

2.º Profanación deliberada de la Sagrada Forma de la Eucaristía, militado de obra a un ministro de la religión cuando se halla ejerciendo las funciones de su ministerio.

3.º Incendio voluntario.

4.º Asociación con malhechores, saltamontes en la vía pública, sustracción con violencia, robo con fuerza en despoblado, hurto con escalamiento o fractura.

5.º Estafa.

6.º Fabricación, introducción o emisión de moneda falsa o de instrumentos destinados a la fabricación y a la falsificación. Se consideran como moneda falsa el papel timbrado y del Estado y de los Bancos, y todo documento que represente valores públicos y legales.

7.º Falso testimonio y soborno de testigos; falsedad en actos y documentos públicos, en escrituras de comercio y privadas, perjurio y acusación y denuncia calumniosas.

8.º Sustracción cometida por los depositarios constituidos por autoridad pública, cajeros de establecimientos públicos y de casas de comercio.

9.º Bancarota fraudulenta.

Art. 4.º Los delitos robados que se encuentren en poder de la persona reclamada, o que se puedan adquirir por haberlos esta depositado en el país en que se haya refugiado, así como todos los que puedan contribuir a la comprobación del delito, serán entregados al tiempo de efectuarse la extradición o cuando fueren habidos.

Art. 5.º Para que sea atendida la demanda de extradición debe presentarse acompañada del acto de prisión, o de cualquiera otro documento que tenga el mismo efecto, según la forma prescrita en la legislación del Estado reclamante, indicando al mismo tiempo la naturaleza y gravedad del delito y la disposición penal que le sea aplicable. A la demanda de extradición acompañarán las sentencias penales del encausado, a fin de facilitar su arresto.

Art. 6.º Si el individuo reclamado es viageo encausado o sentenciado, en el país donde se refugió por crímenes o delitos en él cometidos, se diferirá la extradición hasta que haya sido absuelto o haya cumplido su condena.

Art. 7.º La extradición no podrá ser negada si después de la perpetración del crimen, durante la causa o al tiempo de la sentencia, hubiese transcurrido el término de prescripción del delito, o si las leyes del país donde el refugiado se halla, exoneran al encausado.

Art. 8.º Siendo obligatorio para el gobierno español el respetar el derecho que adquiere en España ciertos delinquentes a ser eximidos de la pena capital en virtud del asilo que les concede la legislación de aquel país, el gobierno sardo se compromete a la tradición concedida al gobierno sardo de los reos que se hallen en aquel caso, si esta es efectuada con la condición de que no podrá serles impuesta la pena de muerte que en el estado actual de la legislación de Cerdeña no es aplicable a ninguno de los reos que gozan en España del derecho de asilo, si mas adelante llegase a ser aplicable. Deberá acreditarse aquel derecho al tiempo de la entrega de los reos mediante copia testimonial de las diligencias judiciales practicadas con este objeto.

Art. 9.º La extradición no se suspenderá por impedimento o cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado hubiese contraído con personas particulares, las cuales podrán hacer valer su derecho ante la autoridad competente.

Art. 10.º Los puertos de Barcelona y Valencia en los dominios de S. M. la Reina de España, y los de Génova y Cagliari en los dominios de S. M. el Rey de Cerdeña, servirán para depósito y entrega de las personas reclamadas.

Art. 11.º Los gastos que ocasionen el arresto, detención, custodia, mantenimiento y transporte de los individuos cuya extradición sea acordada a uno de los depositos citados en el artículo precedente, así como el mantenimiento y custodia de los mismos en el punto del depósito por término de dos meses, serán de cuenta del gobierno del país en que el refugiado se encuentra. El transporte y mantenimiento de los delinquentes desde el momento de su entrega serán de cuenta del Estado reclamante.

Art. 12.º Los dos meses fijados en el artículo anterior serán contados desde el día en que la legación de uno de los países habrá puesto en conocimiento del ministerio de negocios extranjeros, en la corte en que se halle, que el delincuente reclamado se halla a su disposición.

Art. 13.º Si uno de los dos gobiernos no hubiese dispuesto de la persona reclamada en el periodo de cuatro meses, contados desde el día en que aquella se puso a su disposición, la extradición podrá ser negada y el delincuente puesto en libertad.

Art. 14.º Cuando la gravedad del delito que motiva la extradición lo reclame, o la conveniencia de mayores precauciones lo aconsejen, los reos podrán ser

